

DESMEMORIA E IMPUNIDAD

VÍCTOR SAMPEDRO BLANCO*

La amnesia es la antesala de la impunidad. Quien no recuerde no podrá nunca sentirse responsable de sus actos, ni exigir responsabilidades por los ajenos. De ahí que el discurso oficial invente las identidades y las memorias históricas sobre olvidos selectivos e inducidos. Pero los pueblos guardan una memoria distinta a la de los escritas institucionales, según la imagen de M. V. Montalbán. Éstos, ya desde Egipto se sientan de hinojos ante los padres de la patria y cantan las absurdas victorias del Soldado Desconocido.

El recluta o el mercenario y sus «efectos colaterales» deben enterrarse en el anonimato patrocinado por todos los Estados Mayores, en el sentido castrense y civil. Su olvido permite al poder conmemorar gestas que los demás sabemos victorias pírricas, burdas patrañas o crueles derrotas, porque conservamos la ausente presencia de quienes ya nada pueden celebrar. Aún guardamos luto con nombres y apellidos. La desmemoria triunfal será abrazada con ardor patrio por quienes no soportan reconocerse ante el espejo de los tullidos o las fotos arrancadas del álbum familiar.

Habrà quien busque los nombres de los suyos en algún muro conmemorativo. Pero, como en las placas de la guerra civil que aún cuelgan de edificios públicos, la lista de los *caídos* es siempre sesgada e incompleta. Los ausentes, aún enterrados en las cunetas donde les *pasaron*, son los legítimos Soldados Desconocidos. Su Día de la Victoria es el de Todos los Santos o el más ecuménico Día de los Muertos, como se celebra en México. En esas fechas, en los márgenes de algunas carreteras de España, brotan ramos de flores a destiempo. No son homenajes a las víctimas de tráfico, sino a los accidentados de nuestra historia.

Hay una historia colectiva, no escrita en bandos oficiales. Porque en las trincheras de todos los bandos recuerda, antes de nada, las pérdidas y, por tanto, la derrota generalizada. Sus héroes no figuran en ningún libro de texto. Apenas se mencionan en algún editorial exaltado. Nunca en el televisor, ni en los mítines electorales. Las escuelas y los alayoces de los padres de la patria –en todos

* Profesor Titular de Opinión Pública, Departamento de Sociología y Comunicación, Universidad de Salamanca.

sus formatos: la chica, la una y grande o la madre patria— como máximo asumen la equidistancia y, así, de nuevo, recrean la amnesia.

Si la responsabilidad de la tragedia la comparan las víctimas y los verdugos, desaparecen los responsables. Eso mismo parecen creer las nuevas generaciones de españoles que, según las encuestas, no recuerdan quién se sublevó el 18 de julio de 1936, ni contra qué, ni con qué consecuencias. Ni siquiera pueden reivindicarse como la primera generación insumisa en el mundo que ha sido capaz de acabar con la recluta obligatoria en tiempos de paz. Los políticos, que concedieron el ejército profesional a cambio de votos, han ocultado a los más de 20.000 insumisos a la mili. Inscrita en la larga marcha del cambio y el recambio, del progreso y la modernidad, la España del siglo XXI carece de una memoria pública basada en la razón democrática, en la razón del *demos*, la del pueblo.

Sólo cabe lugar para la autocomplacencia en el relato de nuestra «unidad de destino universal» constatemente reactualizada. Fuimos la séptima potencia económica en la «democracia orgánica» de los sesenta y ahora formamos parte de una Europa ya reducida a sus primeras cuatro letras y en minúsculas: *europa*. Con semejante visión de nuestro pasado y con los periódicos en las manos es imposible identificar, por ejemplo, las evidentes continuidades entre Maresa, Ibercorp y Gescarrera. Más difícil todavía (porque aquí las raíces son seculares y las responsabilidades generalizadas) resulta conectar la xenofobia del cristiano viejo con los sucesos racistas de El Ejido, que es a donde quería llegar.

Así, con razón (pero para mayor escarnio del moro), los tribunales públicos reservan en exclusiva el apelativo de fascista para el asesino etarra y, por extensión, para el contrincante electoral cuya memoria nacionalista difiere de la propia. Así, la desobediencia civil insumisa del primer objeto de conciencia del año 1971 es un término que hasta el propio Jefe de Gobierno pudo convocar frente al «fascismo separatista vasco», en el *sumum* de incongruencia con su cargo y con el léxico. Ya no está de moda entre los sociólogos estudiar lo que se llamó «el franquismo sociológico». En cambio, nuestros intelectuales se aplican con denuevo a las diatribas deconstruccionistas de la memoria colectiva de sus oponentes. Señalan la viga en el ojo ajeno y administran omisiones. Parece que la sumisión al poder paternalista, la convivencia clientelar y el miedo—asco a la diferencia hubiesen sido barridos en 25 años, en esta sociedad y en sus baridos, por la modélica Transición.

La memoria popular sobrevive a la instrumentalización electoral o comercial. Las cuestiona muchas veces reivindicando los héroes desconocidos y sus conquistas reales: las arrancadas, nunca las concedidas. No se trata de glorificar dicha memoria con populismo, sino de reivindicarla como reserva de ética de la resistencia y de la solidaridad. Ambas se manifiestan ahora, por ejemplo, en la resistencia organizada a la ley de extranjería y en infinidad de gestos huma-

nitarios, personales y colectivos, ante el drama cotidiano de los inmigrantes. Esa ayuda humanitaria no viste uniformes y no suele atraer a las cámaras de televisión.

Cuando el pueblo exhibe la sumisión de los rebaños y la xenofobia de las hordas, debiéramos exigir responsabilidades también a los escribas oficiales: los comunicadores profesionales, políticos y periodistas que cobran por hacer lo que el resto debiéramos practicar más a menudo, hablar y actuar sobre lo público. El relato colectivo que emana del poder, cada vez más, busca rentabilizar beneficios o puestos de la Administración. Carentes de intención alguna de liderazgo o pedagogía, nuestros hombres públicos adulan a un consumidor de productos y servicios, que ya incluyen a los programas electorales y las políticas públicas. La oferta, para ser atractiva, no puede remitir a responsabilidades, sacrificios o conflictos pasados. ¿Desde dónde y contra quién se hizo «el cambio»? ¿Quiénes fueron a menos y quiénes «vamos a más»? El pueblo, en cambio, suele afirmar que «todo sigue igual» y que «siempre ganan los mismos».

Las historias oficiales nos impiden reconocernos como «los salvados» que escaparon de haber sido «hundidos» por el curso de la Historia (esta vez sí, con mayúsculas). Esas dos categorías—salvados y hundidos—distinguen y, al tiempo, igualan al ser humano, porque le reconoce una dignidad siempre amenazada. El hundimiento y la salvación dependen de nuestra responsabilidad personal, pero también de la contingencia de los contextos en los que nos emplaza el azar. Por elección y por casualidad, a veces somos víctimas, otras verdugos.

«Hundidos» y «salvados», así vio Primo Levi, el judío paritano italiano, a su generación, tras sobrevivir a los campos de concentración nazis y antes de suicidarse frente al bando triunfador. Cuestionó la autocomplacencia de los salvadores de las patrias que desde 1945 conmemoran una Europa escindida por más rielones de acero que el que cayó en 1989 y rodada de barreras económicas. Extranjeros generamos vergüenza y lamentaciones. Las leyes de extranjería sólo pueden dictarse en naciones desmemoriadas. En nuestro país aún resulta más evidente. Las dictaron políticos que durante la dictadura fueron exiliados clandestinos o asilados ilegales de las democracias. Nunca fueron pensadas para proteger a los extranjeros inmigrantes, sino a empresarios nacionales que han olvidado quienes fueron anteayer, en una o varias generaciones anteriores: emigrantes.

Con la Ley de Extranjería quienes llegan a nuestras costas, buscando la Europa del pan y la libertad, ven negados no ya su derecho de tránsito, sino el de reunión y, por tanto, de representación. Pero las pateras encarnan precarios *Mayflowers*. La imagen es de Manuel Rivas. Enfilan una tierra prometida en la que ya sólo cree quien se arroja al Estrecho sin saber nadar. El saberse con derecho al progreso material y a la ciudadanía impulsó, hasta hace bien poco, la emigración masiva de europeos y generó los sistemas de protección social y de dere-

chos civiles que les distingue. Ahora el «euroescepticismo» cunde en la Unión Europea, entre gobernados y gobernantes. No sólo se pierden referendums de adhesión, también se suspende el tratado de Schengen contra los manifestantes de Génova. Libertad de movimiento para los capitales y centros de detención para los extranjeros hambrientos y los ciudadanos contestatarios.

Mientras, los últimos euro-optimistas sortean o sucumben a la muerte en nuestras costas. Sus ideales son ocultados de forma insidiosa por los escribas que sostienen la tesis del «choque de civilizaciones» entre Occidente y el Islam (a lo Huntington). Algunos dan un paso al frente y anatemizan el «multiculturalismo» (a lo Sartori), como amenaza de unas libertades que deben prohibirse a todos los que todavía no gozan de ellas.

La denominación de «sin papeles» compendia, en su polisemia, la condición de los inmigrantes «ilegales». Carecen de permiso de trabajo y, en todo caso, éste será el único papel que les será concedido. Deben conseguirlo antes del de residencia, ingresando una vez aquí en un círculo de miseria y marginación. Debe tener y sólo tendrá los papeles oficiales, pero ninguno social. No podrá ejercer el papel de padre o marido, ante las dificultades del reagrupamiento familiar. Se le impedirá reivindicar unas condiciones laborales mínimas. Deberá limitarse a ser un trabajador temporal, que tras la jornada busca lo que se le exige: la invisibilidad. Porque tampoco aparecerá en los otros papeles, en los periódicos.

Las verjas y los centros de detención de «sin papeles», que apenas nos muestran los medios, han sido contruidos por compatriotas supervivientes de la clandestinidad y la opresión. Hemos olvidado ese pasado, mirando en los telediosarios cadáveres de los hundidos en el Estrecho. Los medios se han convertido en el ranatorio de nuestra memoria. La contabilidad cotidiana de los «hundidos» los oculta bajo las cifras de una supuesta «invasión» o «marea humana». Los aleja, incluso varados en las rocas, y nos aleja de ellos. Nuestras cifras son otras: las de la macroeconomía que nos retrata en el furgón europeo de primera clase.

Nuestra opulencia (exagerada además por los medios), como mucho, sería responsable de provocar un involuntario «efecto llamada» sobre las pateras que, según los gobernantes y los policías españoles y marroquíes, siempre organizan los mafiosos de la otra costa. Nadie en este país ha sido ni es responsable del *Informe Picasso*, que recoge la investigación judicial de los desmanes de los generales africanistas en la guerra con Marruecos, antes de embarcarse en la Reconquista de la Península. Su relectura señala el origen de las mafias actuales que trafican con seres humanos y denuncia nuestro último colonialismo, perpetuado ahora en guerras comerciales, supuestamente incruentas, y en la dejación oficial de sus compromisos de cooperación internacional y ayuda humanitaria. Sin víctimas que encarar, los responsables, ya impunes, continúan cavando en

los medios las fosas sépticas de nuestra memoria colectiva. Las nuevas víctimas recibirán los cuidados de los cirujanos de hierro (más medidas policíales), nuevamente disfrazados de socorristas.

La negativa del Defensor del Pueblo a recurrir la Ley de Extranjería en la pasada primavera, sólo dejó una salida a los hombres y mujeres libres. Según Levi, son los únicos que pueden gozar del lujo de descansar y sentir nostalgia de un mundo más humano. Las organizaciones civiles se han agrupado en una plataforma colectiva: *Desobedecer la ley*. Promueven la nueva insumisión que consiste en auxiliar a quien lo necesita, tenga papeles o no. Por acoger a un inmigrante ilegal o llevarlo en coche se paga una multa, que pretende igualar al ciudadano solidario con un traficante de esclavos. Numerosas organizaciones, administraciones locales, centros educativos, culturales y de servicios sociales están suscribiendo una declaración colectiva de desobediencia, comprometiéndose a atender a cualquier persona, sin importarles su condición legal (www.sindominio.net/sinpapeles/manual.html). Otra iniciativa insumisa, también penada, ha consistido en la entrega colectiva de documentos del D.N.I. (www.desobedienciaivil.pangear.org). Ambas estrategias, que serán relanzadas este otoño, expresan el deseo de los salvados de identificarse con los hundidos. La Historia (de nuevo con mayúsculas) les apoya.

Escribe Levi que en Auschwitz se llamaba *Muschmann* (musulmán) a quien se sabía que acabaría pronto en las cámaras de gas. Curiosa coincidencia con la mayoría de magrebies o subsaharianos que llegan a las costas del Sur; y no es la única:

«A quien tiene le será dado; a quien no tiene, le será quitado... esta ley inicua está abiertamente en vigor, es reconocida por todos. Con los adaptados, con los individuos fuertes y astutos, los mismos jefes mantienen con gusto relaciones, a veces casi de camaradas; por que tal vez esperan obtener más tarde alguna utilidad. Pero a los «musulmanes», a los hombres que se desmoronan, no vale la pena dignificarles la palabra, porque ya se sabe que se lamentarán y contarán lo que comían en su casa. Vale menos aún la pena hacerse amigo suyo, porque no tienen en el campo amistades ilustres, no comen nunca raciones extras, no trabajan en *Kommandos* ventajosos y no conocen ningún modo de organizarse. Y, finalmente, se sabe que están aquí de paso y que dentro de unas semanas no quedará de ellos más que un puñado de cenizas en cualquier campo no lejano y, en un registro, un número de matrícula vencido. Aunque englobados y arrastrados sin descanso por la muchedumbre innumerable de sus semejantes, sufren y se arrastran en una opaca soledad íntima, y en soledad mueren o desaparecen, sin dejar rastros en la memoria de nadie» (*Si esto es un hombre*, Muchnik, 1999).

Los movimientos de solidaridad están intentado romper el silencio político y mediático de los «sin papeles», que no figuran en los censos electorales y no cuentan como objetivo publicitario. Nunca votarán ni consumirán como españoles. Por ello, son deportados y enterrados extramuros del discurso mediático de las identidades y la memoria oficial. La invisibilidad del «ilegal» puede denunciarse con la desobediencia a las leyes ilegítimas. Lo harán quienes sientan una identidad común con quien ahora es quien antes fuimos. Serán, seremos, visibles si además compartimos luchas, multas y sonrisas, recordando que hace menos de una década los «delincuentes insolidarios» ya cumplimos el deber político y moral de acabar con otra esclavitud: la mili.

EL ESTADO Y LOS «CHIRINGUITOS» PRIVADOS

RAFAEL ESCUDERO ALDAY*

El caso *Gescartera* parece haber producido una importante sacudida en la opinión pública española. Muchas personas, entre las que cabe contar no sólo a los directamente afectados, han caído en la cuenta de que la gestión privada de los recursos no es sinónimo de mayores y mejores resultados. Esta vez se ha tratado de recursos económicos, los cuales se han esfumado en algún lugar de las trampas del mercado. Desde la simple mala gestión hasta la estafa pura y dura, el consumidor puede elegir la razón o razones que más le convengan a la hora de explicarse la desaparición de importantes sumas de dinero. Y, ahora, muchos han vuelto la mirada hacia lo público, que curiosamente también ofrece a los ciudadanos, a través de mecanismos como las letras y bonos del Tesoro, la posibilidad de invertir sus ahorros. Claro que esta posibilidad no ha sido nunca tan atractiva como otras. En primer lugar, no se ganaba —o, por lo menos, eso decían— tanto dinero; en segundo lugar, el Estado nunca ha sido —también insistían en esto— un gestor muy fiable; y en tercer término, invertir en lo público jamás ha estado de moda, y menos en los tiempos que corren.

Lo privado ofrece seguridad y beneficios, de manera que dejar el dinero en manos de una agencia del tipo de *Gescartera* se antojaba, así, la mejor opción. Y más si, como parece, la mente de los inversores podía estar influida en un sentido positivo, porque se intuía que la operación contaba, en un punto o momento del proceso, con un presunto aval de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ésta no es una cuestión baladí, puesto que, a pesar de que la oferta privada se presenta como atractiva, todavía resulta mucho más si aparece por detrás la garantía de algún organismo público. Basta con echar un vistazo a la publicidad para darse cuenta de la importancia que este dato llega a alcanzar. Pero, dejemos ya el caso *Gescartera*, con los órganos competentes encargados de depurar las responsabilidades penales y políticas oportunas, si las hubiere.

Una de las conclusiones generales que merece la pena extraer de este proceso es la desmitificación de todo lo relacionado con el mercado, palabra con la que se designa ese conglomerado de intereses y empresas privadas que actúa

* Profesor de Filosofía del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid.